

Fernando GARCÍA SANZ, José Ramón URQUIJO GOITIA "España y la República Romana".- En : *Rassegna storica del Risorgimento*.- (1999) supplemento al fascicolo IV; p. 317-345.

ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ROMANA

Los inicios del siglo XIX significaron un cambio fundamental del peso internacional de los distintos países europeos. España, que había perdido posiciones en dicho contexto, vio agravada su situación durante el desarrollo del Congreso de Viena, porque ni fue reconocida su aportación a la derrota de las fuerzas napoleónicas, ni recibió ninguna ayuda para su pretensión de recuperar los territorios americanos. Posteriormente vería también bloqueados todos sus intentos de recabar apoyos internacionales para esta empresa. Tal fue uno de los ejes fundamentales de la actuación de la política exterior de Fernando VII, especialmente hasta la sublevación liberal de 1820. El Trienio Liberal supuso un cambio radical en la estrategia internacional y la quiebra definitiva de la Santa Alianza, cuya actuación en Italia y España puso los fundamentos para su propia ruina.

A partir de aquellos hechos, empezó a cristalizar el mito de que los acontecimientos en una península tenían una repercusión inmediata en su vecina. Este pensamiento, que perduró durante buena parte del siglo XIX, determinó muchas de las actuaciones respectivas frente a los problemas surgidos en el otro país. Sobre todo durante los primeros cuarenta años del siglo españoles e italianos se consideran partícipes de los mismos acontecimientos: «A despecho de las diferencias en su respectiva evolución histórica, un mismo pensamiento reunía entonces el intento de las minorías activas de ambos pueblos, no solamente de los elementos liberales, sino también de los grupos prepotentes en ciertos sectores sociales del absolutismo». ¹⁾

¹⁾ J. VICENS VIVES, *Relacion entre Italia y España durante el Risorgimento*, en *Obra dispersa. España, America, Europa*, Barcelona, 1967, vol. II, pp. 336-343 (cita de pág. 336). Este trabajo es traducción, como el propio autor especifica, de la comunicación presentada al XXXI Congresso di Storia del Risorgimento (Mantova, 21-25 de septiembre de 1952) y publicada en la *Rassegna storica del Risorgimento*, XLII (1955), pp. 482-488 y en las *Atti del*

La sublevación española, capitaneada por el general Rafael Riego, provocó un movimiento insurreccional en Nápoles, que adoptó como norma constitucional la realizada por las Cortes de Cádiz en la década anterior. En ambas penínsulas, la intervención de las tropas de la Santa Alianza restableció a los monarcas en el pleno ejercicio de su poder absoluto.

La influencia extranjera en España pasaba por dos ejes fundamentales: la veneración por la figura del Zar; y el ascendiente de los llamados embajadores de Familia, representantes de monarcas de la Casa Borbón. La situación cambió de forma notable en 1830. El bando liberal vio reforzadas sus posiciones con la incorporación de Francia y Bélgica, al tiempo que Holanda mostraba reticencias hacia las Potencias Moderadas. Si bien ideológicamente Fernando VII se encontraba identificado con Austria, Prusia y Rusia, su falta de apoyo, en la cuestión sucesoria española, a la opción defendida por el Monarca español le obligó a variar sus alianzas internacionales. Este cambio se hizo aún más patente a lo largo de 1833, como consecuencia del papel jugado por los embajadores de Austria, Cerdeña y Nápoles en los acontecimientos de 1832.

A pesar de ello, las relaciones de familia (la reina española era hermana del monarca napolitano), empujaron a Fernando II a intentar mediar entre los dos bandos de la familia española.²⁾ Todas las iniciativas se saldaron con un completo fracaso, pues las posturas resultaban irreconciliables.

El cambio en las relaciones internacionales de España fue aún más notorio en los primeros meses del reinado de la hija de Fernando VII, quien no fue reconocida por diversos Monarcas (Austria, Cerdeña, Holanda, Nápoles, Prusia, Rusia y Vaticano), quienes, aun ideológicamente cercanos a

XXXI Congresso di Storia del Risorgimento Italiano, Roma, 1956, pp. 318-325. Vid sobre este tema desde el punto de vista historiográfico, M. MUGNAINI, *Un esempio di circolazione delle élites: Italia e Spagna dal 1808 al 1860, rassegna della storiografia italiana*, y M. MORAN ORTI, *España e Italia: historiografía sobre el primer tercio del siglo XIX*, en F. GARCÍA SANZ (comp.), *Españoles e italianos en el mundo contemporáneo*, Madrid, 1990, pp. 3-45 y 47-65, respectivamente; F. GARCÍA SANZ, *Gondoleros y toreros: España, Italia; la indiferencia simpática*, en *Aula de Cultura* (Fundación El Correo Español-El Pueblo Vasco), vol. XI, (1992-1993), pp. 37-59. Para una revisión historiográfica de conjunto, I. SAZ, *Dalla Spagna*, en F. MAZZONIS (ed), *L'Italia contemporanea e la storiografia internazionale*, Venezia, 1995, pp. 115-147; un análisis centrado en el siglo XIX, M. MUGNAINI, *Italia e Spagna nell'età contemporanea. Cultura, politica e diplomazia (1814-1870)*, Alessandria, 1994 (sobre el tema que nos ocupa, en particular las pp. 192-196).

²⁾ J.R. URQUIJO GOITIA, *Antecedentes del Abrazo de Vergara*, en *150 años del Convenio de Bergara y de la Ley del 25-X-1839*, J. AGIRREAZKUEENAGA y J.R. URQUIJO (eds), Vitoria (Gasteiz), Eusko Legebiltzarra-Parlamento Vasco, 1990, pp. 227-267; J.R. URQUIJO, *Relaciones entre España y Nápoles durante la Primera Guerra Carlista*, Madrid, 1998.

las propuestas del pretendiente carlista, adoptaron una actitud expectante. La decisión de Francia e Inglaterra de reconocer inmediata y solemnemente a la reina Isabel II, acabó por marcar un claro cambio en las alianzas españolas. Ambos países jugaron de forma alterna un importante papel en los asuntos internos de España, alternancia que se producía según gobernarán moderados o progresistas.

Los monarcas italianos rechazaron el testamento de Fernando VII, postura que, en el caso napolitano, fue acompañada de una nueva protesta formal, porque consideraba lesionados sus intereses. La actitud de Cerdeña y Nápoles, siempre bajo el denominador común del apoyo al Pretendiente carlista, adoptó formas completamente distintas. En el caso del reino piemontés se trataba de un apoyo decidido, efectivo y discreto: entrega de cantidades; apoyo diplomático avalando y protegiendo las actuaciones de los emisarios carlistas; facilidades para la compra y transporte de armas, etc. Por el contrario, Fernando II se perdía en interminables parlamentos, al tiempo que demostraba una absoluta inoperancia.

En 1834 el Gobierno español llevó a cabo una ofensiva diplomática, tras la que abandonó las líneas de comunicación abiertas con los países que se mostraban reticentes hacia la soberana española. La nueva situación diplomática quedó sancionada con la firma del tratado de la Cuádruple Alianza, que creaba una alianza liberal destinada a proteger el desarrollo del liberalismo en Europa.

La ruptura definitiva de las relaciones con los reinos italianos se produjo en diversos momentos del año 1836. En julio de 1836, el *Giornale del Regno delle Due Sicilie* publicaba un retrato del Pretendiente carlista, utilizando el tratamiento de rey de España. Un mes más tarde, las Juntas revolucionarias surgidas en numerosas poblaciones españolas lograban imponer a la reina María Cristina la proclamación de la temida Constitución de 1812. Ambos hechos determinaron la retirada de Embajadores, aunque no se produjo un salto cualitativo (el reconocimiento de don Carlos) en apoyo del bando anti-liberal. El monarca napolitano centró sus esfuerzos en lograr una conciliación, más que entre los bandos contendientes, en el seno de la Familia Real. La evolución de la guerra impidió la solución negociada por los enviados napolitanos. Por su parte, la política sarda se movía entre la defensa de la ideología absolutista y la presión de los comerciantes, que habían visto lastimados sus intereses por la ruptura de las relaciones entre ambos países. El Conde Solaro se mantuvo siempre firme en la primera opción, por lo que las relaciones no se restablecieron hasta su desaparición política.

En 1838, cuando la Primera Guerra Carlista se había alargado excesivamente, incluso para las naciones europeas que no intervenían directamente en ella, la diplomacia española, con el apoyo del Gobierno inglés, envió una misión integrada por Francisco Zea Bermúdez y el ítalo-español Manuel Marliani. Su paso por diversos países, y especialmente por Austria, que expulsó a Marliani de su territorio, se saldó con un rotundo fracaso, porque fueron incapaces de convencer a sus gobernantes de la necesidad de proceder al reconocimiento de Isabel II, como medio de estabilizar la situación europea y de consolidar el moderantismo en España.

La «expulsión» de la Regente María Cristina, y el subsiguiente retraimiento francés, no eran el mejor medio para negociar el reconocimiento internacional. El regreso de los moderados en 1843 y las negociaciones en torno al matrimonio de Isabel II propiciaron un cambio en la disposición de los Gobiernos que no habían reconocido aún a Isabel II.

El reconocimiento de Isabel II como reina de España (12 diciembre 1843) por parte de Nápoles provocó críticas entre las Cortes moderadas que no lo habían realizado, y también en los medios carlistas, que se veían abandonados en el juego de intereses que rodeó las negociaciones para encontrar marido a la hija de Fernando VII.³⁾ Con esta acción, Nápoles pensaba recuperar la posición que había tenido en la década anterior, pero sus previsiones resultaron baldías: no logró casar a un Príncipe napolitano con la Reina de España, y se vio obligado a justificarse ante sus aliados.

En 1845 se iniciaron las negociaciones para solucionar los problemas pendientes entre España y el Estado Vaticano. La muerte de Gregorio XVI (1846) eliminaba otro de los actores del conflicto, y facilitaba, en consecuencia, la solución del problema, que recibiría la solución final con el Concordato de 1851. Las iniciales proclamas en sentido liberal del nuevo Pontífice parecían vislumbrar una rápida solución al problema.

Al mismo tiempo, el Gobierno del general Narváez se embarcaba en una operación de legitimación ante las naciones conservadoras. En 1846, Salvador Zea Bermúdez estableció contacto en Bruselas con Prusia, que se ofreció a mediar ante Austria y Rusia. Casi al mismo tiempo se enviaba otro emisario, Luis de la Torre Ayllón, a Viena.

Si bien no se consiguió el reconocimiento, resultaba evidente que se habían acortado considerablemente las distancias. Fracasada por lo tanto la

³⁾ E.J. PARRY, *The Spanish Marriages 1841-1846. A study of the influence of dynastic ambition upon foreign policy*, London, 1936; J.R. URQUIJO, *Aspectos de las relaciones con España en el Archivo di Stato di Napoli (1830-1844)*, en *Spagna contemporanea*, 2 (1993), n. 3, pp. 145-159.

diplomacia de los embajadores, se inició la de las misiones militares. Diversos oficiales españoles y especialmente Antonio Remón Zarco del Valle, Inspector general de Artillería, mantuvieron correspondencia «con varios Generales de crédito de aquel Imperio», a los que remitían publicaciones españolas.⁴ A finales de 1847, el Gobierno consideró necesario hacer gestiones más abiertas de cara a lograr el reconocimiento diplomático. Con tal fin se decidió comisionar al general Zarco del Valle. De esta forma se pretendía camuflar la embajada, como si se tratara de una más de las misiones enviadas con carácter estrictamente militar. Un posible fracaso diplomático quedaría encubierto, dada la condición militar del encargado de la misión. En marzo de 1848 salieron los comisionados hacia París.

Los acontecimientos europeos de 1848 dieron oportunidad a España de resituarse políticamente en el panorama europeo. En España se produjeron diversos conatos revolucionarios, de los que revistieron particular importancia los de Madrid, el 26 de marzo y el 7 de mayo, pero de escasa entidad y reprimidos además de forma drástica por el grupo de generales adictos a Narváez. Dos países quedaron al margen de la ola revolucionaria: España y Rusia. Los cambios podían favorecer a España en un doble sentido: Austria y Prusia pasaron a ser gobernadas por políticos más liberales y, en segundo lugar, la estabilidad española convertía a la Península en un aliado que podía contrapesar las fuerzas revolucionarias, sobre todo ante Francia, cuyo flanco cubría.

El Gobierno español ante los sucesos de Italia

Dada la actitud del Papa hacia el régimen liberal español, a principios de 1848 España no contaba con Embajador acreditado en Roma, y mantenía sólo un encargado de negocios, Vicente González Arnao, hijo de un conocido afrancesado, que había ingresado en la carrera diplomática hacía más de veinte años. Como era general en España, sus informes transmiten al principio un punto de vista positivo hacia las reformas papales. Así, con ocasión de la concesión del Estatuto (14 marzo 1848) escribe al Ministro de Estado subrayando el clima de calma que reina en Roma gracias a la nueva Constitución, «la generalidad ha recibido la constitución con mucha alegría,

⁴ J.R. URQUIJO, *España y Rusia. De la ruptura al reconocimiento*, en *Homenaje a D. Ignacio Valls*, Valencia, 1990, pp. 409-423.

y parece decidida a defender las nuevas instituciones contra las exageraciones de los revolucionarios». ⁵⁾

Pero no tardó mucho en comenzar a mostrar reticencias sobre la evolución de los acontecimientos, indicando que el Papa se siente coaccionado, que carece de libertad, pero que, no obstante «debía advertir que esta falta de libertad se refería sólo a los negocios civiles, conservándola completa S.S. con respecto a los negocios espirituales. Me consta por otra parte que el Papa se ha expresado en este sentido con varias personas». ⁶⁾ En tal sentido, señala expresamente la cuestión de la guerra. Pero en el mismo despacho plantea dos temas que serán fundamentales para la posterior política española.

En primer lugar, en cuanto a la actitud que debía seguirse sobre la decisión vaticana de nombrar un ministerio de Asuntos Exteriores laico, es su opinión que resulta imposible establecer la separación de competencias, y contradice además los principios del *Motu proprio* sobre el arreglo del Consejo Ministros de 29 de diciembre de 1847. A la espera de ulteriores instrucciones, decide evitar todo lo posible el mantenimiento de relaciones con él y responder con un simple acuse de recibo cuando llegase a sus manos la anunciada circular del ministerio de Exteriores a los diplomáticos acreditados en Roma. Con ello, pretendía el diplomático español evitar la aceptación de la nueva situación y seguir tratando directamente con el Secretario de Estado como él mismo le había hecho saber al Papa.

En segundo lugar, trata ya de la hipótesis de que el Papa se viera en la necesidad de abandonar Roma si se radicalizasen los acontecimientos, tal y como había sucedido en 1815. En previsión de tal eventualidad solicitaba se le enviasen las oportunas instrucciones:

«También me atrevería a suplicar a V.E. se sirviese darme sus instrucciones acerca de un acontecimiento, que no creo probable, pero para el cual, en medio de la agitación que reina en este país, desearía estar prevenido. Los revolucionarios demuestran cada día más audacia; todas sus tendencias son hacia el establecimiento de la república, y a este fin dirigen todos sus esfuerzos para conseguir aquí la separación de las dos Potestades. Sus exigencias pudieran ser tales que el Santo Padre negándose completamente se viese en la necesidad, para salvar su autoridad, de salir de Roma».

⁵⁾ AMAE, Leg. 2658. Despacho del Encargado de Negocios (16 marzo 1848, n. 65) al Ministro de Estado.

⁶⁾ *Ibid.* Despacho del Encargado de Negocios (18 mayo 1848, n. 102) al Ministro de Estado.

La respuesta a dicho despacho entraba dentro de la lógica de un gobierno moderado como el existente entonces en España, pero determinados aspectos merecen un comentario detenido de la misma. Las primeras palabras del Ministro de Estado son una mezcla de reproche, por la actitud que la Santa Sede había seguido hasta entonces con respecto a España, y de justificación de las medidas que los gobiernos liberales habían seguido en relación con la Iglesia:

«Los conflictos en que hoy se encuentra el Jefe de la Iglesia pudieran hacerle comprender cuánto son excusables otros Gobiernos que en igualdad de circunstancias se han visto obligados, por evitar mayores males, a prestarse a exigencias hijas de la época y de los sucesos. Pero dejando a un lado reflexiones que en el momento podrían tener una interpretación muy distante de los sentimientos de veneración y de respeto que distinguen a la Reina N.^a S.^a y a su Gobierno con respeto al Jefe de la Iglesia, paso a contestar a los dos puntos sobre que V.S. consulta en su citado despacho». ⁷⁾

Dentro del respeto con el que siempre se referían a la autoridad eclesiástica, hay también una cierta amargura y queja contra la actitud vaticana respecto a España en las negociaciones que se estaban realizando sobre el nuevo Concordato. Dejando a un lado este inciso, cuya importancia reside, entre otras cosas, en que está colocado al inicio del texto, vamos a centrarnos en la respuesta a las dos cuestiones planteadas por el representante en Roma.

Respecto a las relaciones con el ministro de Asuntos Exteriores laico, el Gobierno español desautorizaba la opinión de su representante en Roma cuando señalaba que los lazos con los Estados Pontificios proceden «de causas puramente religiosas, pues los negocios entre los dos países son de muy escaso interés», a pesar de lo cual no debe dejar de relacionarse con el nuevo ministro. Dicha medida se justificaba por la necesidad de acomodarse «a las circunstancias, sin entrometerse en negocios interiores de otro país», sin que ello significase una minusvaloración de las relaciones religiosas con el Santo Padre.

Lógicamente, la hipótesis de una posible huida del Papa obligaba a una delicada y matizada respuesta:

«[...] si tal desgracia llegase a tener lugar deberá desde luego seguir a S.S. a donde quiera que se dirija, porque el objeto de la misión de V.S. es esencialmente

⁷⁾ *Ivi.* Despacho del Ministro de Estado (3 junio 1848) al Encargado de Negocios.

religioso. En tal caso deberá hacer comprender tan especial consideración a los demás individuos del Cuerpo Diplomático extranjero, y a los Jefes del Gobierno temporal de Roma, pues el de S.M. no pretende mezclarse en los negocios interiores de los Estados Pontificios, y porque su representante acompañe al Papa no prejuzga la cuestión del ejercicio de su poder temporal, sino que presta un homenaje de respeto al Jefe de la Iglesia y sigue su autoridad espiritual que es el objeto especial de la misión de V.S. ».

A continuación el ministro ordenaba a González Arnao que de cumplirse las circunstancias que obligasen al Papa a salir de Roma, debería ofrecerle la posibilidad de trasladarse a territorio español, y en concreto se ofrecía la isla de Mallorca, paraje en el que Pío IX señaló que había estado prisionero (octubre de 1823) durante su viaje a Chile.

Por último, no se desaprovechaba la oportunidad de insistir en que se le reiterase al Papa la urgencia de un rápido restablecimiento de las relaciones con España para que, en caso de producirse la eventualidad de la que se trataba, España tuviese en Roma una representación de más alto nivel. Sobre este punto el Papa reaccionó rápidamente e hizo transmitir al Gobierno español que había dado instrucciones para que se agilizase el proceso.

En efecto, pocos días más tarde (20 de junio), el representante español fue recibido en audiencia privada, en la que el Soberano Pontífice le expresó su disgusto por la situación respecto a dos puntos fundamentales: su negativa a guerrear con Austria y la existencia de un ministerio civil de Asuntos Exteriores. Respecto a la situación general señaló al representante español que se sentía coaccionado, «non sono libero» fue la expresión utilizada. Poco tiempo después España acreditaba como Embajador ante el Vaticano a Francisco Martínez de la Rosa, figura de gran importancia en la vida política española, y al mismo tiempo ordenaba el envío a las costas de Italia de un buque, con el que se pretendía apoyar al Pontífice, tanto para el caso de que necesitase refugio como de que se iniciase una intervención armada.⁸⁾

Con motivo del asesinato de Rossi, el Embajador español se presentó en el Quirinal para ponerse a las órdenes del Papa. Martínez de la Rosa describe los hechos sin ocultar un profundo desprecio hacia los elementos revolucionarios: canciones despectivas bajo las ventanas de la casa del

⁸⁾ DSC, 19 mayo 1849, n. 99, p. 2305, discurso del Ministro de Estado Pedro José Pidal.

difunto, desconcierto en las calles, Parlamento que no se atreve a condenar los hechos, vacío de poder, etc. Daba a entender que la situación resultaba cada día más incontrolable, y que podía derivar hacia la pura y simple anarquía. No podemos olvidar que su experiencia como gobernante en España se desarrolló en períodos de características bastante similares, por lo que era especialmente sensible ante una realidad de este tipo.

En el Quirinal se concentraron también otros diplomáticos, aunque el español era el único con categoría de embajador, que fueron recibidos por el Papa, quien les señaló:

«[...] que se hallaba en las circunstancias más graves; que había llamado al Presidente y otros Diputados, extrañando la conducta que el día antes habían observado y que no había hallado el apoyo que era de esperar; que tampoco había la fuerza de las armas; no habiendo siquiera quien quisiese encargarse de mandarlas, pero que a pesar de todo estaba firmemente resuelto a oponerse a las propuestas que iban a hacerse por creerlas contrarias a su conciencia y a no consentir la entrada de nuevos Ministros representantes de aquellos principios y dispuestos a ponerlos en práctica».⁹⁾

Martínez de la Rosa tomó la palabra «para hacer presente a S.S. lo digno que me parecía aquella conducta; que S.S. ofrecería así un noble ejemplo a los demás gobiernos, salvando su propio decoro y la gloria del Pontificado». Poco después se presentó en el Quirinal una comisión de los sublevados que planteó varias peticiones: Promulgación del principio de la nacionalidad italiana; convocatoria de la *Constituyente* y verificación del proyecto del acta federativa; cumplimiento de las resoluciones de la Cámara de Diputados respecto de la guerra de la independencia y completa adopción del programa de Mamiani del 5 de junio. Entre los componentes de la comitiva se encontraba Galetti, Comandante General de los Carabineros, quien señaló que se podría transigir algo en las personas pero no en los principios, y «que el pueblo no quería oír razones ni sufrir dilación; y que si el Papa no condescendía con ello, correría mucha sangre y habría grandes estragos». Las evasivas respuestas del Pontífice incrementaron la agitación popular, llegándose a atacar el Palacio.

El Papa preguntó a los diplomáticos qué actitud adoptarían sus Gobiernos ante tales hechos. Martínez de la Rosa evidenció una postura más teatral que efectiva: «mis órdenes o instrucciones son poner a disposición

⁹⁾ AMAE, Leg. 2658. Despacho reservado y cifrado del Embajador de España (18 noviembre 1848, n. 46) al Ministro de Estado.

de S.S. los Ejércitos, las naves y todo el poder de la Reina de España, y por mi parte ofrecerle que no llegarán a su sagrada persona sin pasar por encima de mi cadáver». Pero poco realistas debían ser tales ofrecimientos cuando, sin entrar a analizar la voluntad del Gobierno de Madrid, España no tenía fuerzas militares disponibles en las cercanías.

Tras la formación de un nuevo Gobierno, los Embajadores de Francia, Rusia y Portugal se reunieron en casa del Español, en donde se acordó «limitarnos a un mero acuse de recibo, expresando que dábamos parte a nuestros respectivos Gobiernos».¹⁰⁾

El exilio papal

Como consecuencia de estos hechos se produjo en Roma una radicalización de la situación política, que el representante español pinta de forma despectiva: huida de los cardenales, algunos de los cuales están amenazados; paralización de la vida pública porque no se reúnen las Congregaciones; amenazas a los funcionarios, etc. En su opinión, el poder se hallaba en el Círculo Popular, institución similar a las Juntas Revolucionarias que marcaron la evolución de la revolución liberal en España.

El mismo día en que escribía esta carta, Pío IX abandonaba Roma camino del Reino de Nápoles, operación en la que colaboraron de forma muy activa los miembros de la Embajada española: Martínez de la Rosa quedó como depositario del dinero y las joyas del Papa, mientras que el primer secretario de la Embajada, González Arnao, acompañó en su viaje al Pontífice y al cardenal Antonelli. Al no existir ningún barco español en las cercanías Pío IX fijó su residencia en Gaeta, hecho que fue decisivo en la evolución de los acontecimientos en la Península italiana. Su salida de la misma hubiera podido acentuar el sesgo democrático y xenófobo.

Desde su nueva residencia dirigió una proclama en la que recogía las causas que le habían empujado a abandonar el Vaticano: «las violencias usadas contra Nos en los últimos días» y la necesidad «de conservar la plena libertad en el ejercicio de la libertad suprema de la Santa Sede». Por supuesto, declaraba nulos todos los actos realizados durante los últimos tiempos, en los que no había gozado de plena libertad. Las razones aducidas por el Pontífice serán ampliamente repetidas en los documentos emanados por las Potencias que intervinieron en su restauración.

¹⁰⁾ *Ivi.* Despacho del Embajador de España (18 noviembre 1848) al Ministro de Estado.

El general Narváez recelaba del comportamiento del gabinete francés, surgido de una sublevación popular anti-monárquica, pero su comportamiento en los acontecimientos romanos le había hecho ganar puntos ante el moderantismo. Por ello, el 5 de diciembre de 1848 se ordenaba al representante en París «ponerse de acuerdo para en lo sucesivo con el (Gobierno) de la República y obrar de concierto en cuanto pudiese contribuir a asegurar la libertad del Jefe de la Iglesia y el respeto debido a su sagrada persona».¹¹⁾ En la misma fecha la *Gaceta de Madrid* publicaba un Real Decreto ordenando «que en todas las iglesias de los dominios de España se hagan rogativas públicas durante tres días consecutivos, con asistencia de todo el clero, autoridades y corporaciones».¹²⁾ En el texto no se hablaba de acciones políticas encaminadas a resolver la cuestión, sino simplemente se subrayaba que la religión era «el sostén incontrastable de los Estados y de los tronos».

De forma inmediata el Gobierno español envió dos vapores a fin de que estuviesen a disposición del Papa, por si optaba por cambiar la residencia. En este momento se inicia una pugna entre diversas naciones por capitalizar la residencia del Pontífice. Francia envió diversas misiones para convencerle de la necesidad de que se trasladase a Marsella.¹³⁾ Martínez de la Rosa desconfiaba de la actuación francesa que consideraba movida por la necesidad de «granjear cierta especie de sanción a la república con la presencia del Santo Padre». Lógicamente, el diplomático español hizo todo lo posible para que fracasasen en su empeño.

La diplomacia española trataba de inclinar la voluntad papal a favor de un traslado a España, empeño para el que quiso contar con el apoyo napolitano con el argumento de que la permanencia en Gaeta resultaba peligrosa, tanto para el Papa como para la propia estabilidad del reino italiano. Pero el Pontífice intentaba mantener una postura más independiente no ligando su seguridad a un solo país: «[...] estaba resuelto a no admitir el de ninguna nación en particular, sino antes bien esperar a ver el acuerdo que tomen los gobiernos, a los cuales se ha dirigido».¹⁴⁾

¹¹⁾ *Ivi.* Despacho del Ministro de Estado (5 diciembre 1848) al Embajador en París.

¹²⁾ *Gaceta de Madrid*, 5 diciembre 1848 (1/2).

¹³⁾ AMAE, Leg. 2658. Despacho del Embajador en Roma (13 diciembre 1848, n. 6) al Ministro de Estado.

¹⁴⁾ *Ibidem.*

Mientras tanto, el Gobierno de Roma hacía todo lo posible para atraer a los Embajadores que habían acompañado al Pontífice, incluso envió una comisión encargada de invitar a éste a que regresase a sus Estados.¹⁵ Su negativa provocó la extensión de rumores sobre la carencia de libertad de Pío IX en su residencia de Gaeta y, obviamente, incrementó el sentimiento republicano en los Estados Pontificios.

El 21 de diciembre de 1848 el Gobierno español enviaba una circular a sus representantes en el extranjero, con los principios sobre los que pensaba basar su política en la cuestión romana.¹⁶ Casi en las primeras líneas se hacía una declaración de principios, indicando que se había ofrecido al Papa «todo aquel (apoyo) que se estime necesario para que la cabeza visible de la Iglesia sea restituida al estado de libertad e independencia, de dignidad y decoro que reclama imperiosamente el ejercicio de sus sagradas funciones». Si bien el problema de la falta de libertad del Papa parecía resuelto con su traslado a Gaeta, quedaba sin solucionar «otra de no menor importancia, y en la que están igualmente interesados todos los Gobiernos Católicos, la de asegurar de una manera estable y permanente la Suprema Autoridad del Pontífice, poniéndola a cubierto no sólo de toda violencia real y efectiva, sino hasta de las apariencias de coacción que tan funestas pueden ser para la causa de la Iglesia como para la paz de los pueblos».

De esta forma se introducía uno de los elementos clave del pensamiento moderado para justificar el mantenimiento del poder temporal del Papado. La existencia de un territorio gobernado por la Iglesia, permitía la independencia de dicha institución y evitaba que fuera mediatizada por ningún país ejerciendo una especie de protectorado. Esta situación había sido garantizada hasta entonces por todas las naciones católicas. Con el fin de poner remedio a la situación se proponía la reunión de esas naciones católicas para que adoptasen una solución de común acuerdo. Con tal fin se habían enviado mensajes a Francia, Austria, Portugal, Baviera, Nápoles, Cerdeña y Toscana, ofreciendo, por mor de la rapidez y la tranquilidad que se gozaba en España, celebrar las reuniones en alguna ciudad española del Mediterráneo.

¹⁵ *Ivi.* Despacho del Embajador en Rome (13 diciembre 1848, n. 9) al Ministro de Estado. F. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, *La revolución de Roma y la expedición española a Italia*, Imprenta de Manuel G. Hernández, 1882, pp. 68-69.

¹⁶ AMAE, Leg. 2658. DSC, 19 mayo 1849, n. 99, pp. 2306-2307. El texto de la carta al Embajador en París en F. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, *La revolución de Roma* cit., pp. 30-32. La comunicación a las diversas Cortes también en la misma obra, pp. 34-37.

En la misma fecha de la circular se firmaban las instrucciones dadas al brigadier José M^a Bustillos, para que se pusiese al frente de una flotilla de 7 barcos, que debía permanecer cerca de Gaeta al objeto de asegurar «la sagrada persona del Papa» tanto en territorio italiano, como si optase por trasladarse a España.¹⁷

Las iniciativas ante el Romano Pontífice continuaron. Incluso el Embajador inglés llegó a ofrecer asilo en la isla de Malta, un territorio cercano y católico bajo su soberanía.¹⁸ Al mismo tiempo los moderados romanos continuaban sus gestiones para llegar a un pacto, que facilitase el regreso del Pontífice. Sin embargo las condiciones propuestas le resultaban bastante inasumibles: oposición a la intervención extranjera y apoyo a la causa italiana contra Austria.

Merece la pena detenerse en las respuestas de las distintas naciones a la circular del 21 de diciembre. Nápoles respondió aceptando la propuesta, pero planteaba dos cuestiones: en primer lugar, que era preferible reunirse en Nápoles por estar más cerca del Papa y porque algunos países no habían reconocido a Isabel II; además, introducía una modificación importante al manifestar la necesidad de que se invitase también a Inglaterra, Prusia y Rusia. Pero ello implicaba que se desvirtuase el sentido de la propuesta española al salirse del círculo de la catolicidad para insertar la cuestión en un ámbito de estabilidad europea, con marcadas connotaciones políticas.

La respuesta de los piemonteses estaba en la línea de su pensamiento político sobre la construcción italiana: necesidad de la unificación de Italia y, en consecuencia, oposición a cualquier actuación que implicase injerencia en tal objetivo. Aunque alababan el interés demostrado por la Soberana española, no consideraban que la intervención pudiera detenerse en las cuestiones religiosas, especialmente porque la huida pontificia se había producido por causas políticas. Lógicamente, la presencia de Austria era rechazada por considerarla insostenible para cualquier Estado italiano. En fin, consideraban que una intervención extranjera sería contraproducente porque haría revolvers a los italianos. En definitiva, su posición impedía la solución propuesta por España y el final del despacho que hicieron llegar a Madrid resumía perfectamente su postura: «obrar directamente sobre el Soberano Pontífice para persuadirle a regresar a Roma y a inducirle a hacer

¹⁷ Las instrucciones en F. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, *La revolución de Roma* cit., pp. 32-33.

¹⁸ AMAE, Leg. 2658. Despacho del Embajador de España en Rome (22 diciembre 1848, n. 13) al Ministro de Estado.

observar con su ejemplo las leyes constitucionales que ha concedido a su pueblo». ¹⁹⁾

Francia propuso que la cuestión fuese tratada en la reunión que debía celebrarse en Bruselas para arreglar los asuntos de Italia. ²⁰⁾ España se opuso porque ello supondría tratar la cuestión como una más de las cuestiones políticas que estaban convulsionando Italia, y no de un elemento fundamental en el aspecto religioso. Con posterioridad cambió su opinión accediendo a que se celebrase en Nápoles y acudiesen además Inglaterra, Prusia y Rusia.

La diplomacia española siempre pensó que Francia manejó los hilos de la actuación napolitana y sarda, a fin de neutralizar las iniciativas españolas. La viabilidad de la propuesta española quedó aún más en entredicho ante el enfrentamiento mantenido con los piemonteses como consecuencia del envío de la flotilla española. ²¹⁾ Cerdeña trataba de evitar por todos los medios que otras potencias interviniesen en la península italiana por considerarlo un tema interno, frente a la posición de España que entendía que la cuestión incumbía a todo el orbe católico.

Hacia la conferencia de Gaeta

El núcleo de exiliados eclesiásticos incrementaba cada día más su exasperación ante las medidas decretadas por el poder constituido en Roma que culminaron con la proclamación de la República. El 14 de febrero el Pontífice protestaba ante el Cuerpo Diplomático contra dicho acto y la abolición del poder temporal del papado. ²²⁾

Durante el primer trimestre del año, continuaron los contactos diplomáticos que no llegaban a ninguna conclusión, mientras las naciones no católicas demostraban poco entusiasmo en la empresa. Finalmente, el Gobierno español optó por enviar a Martínez de la Rosa las instrucciones que deberían fijar su conducta en la conferencia que tendría lugar en algún

¹⁹⁾ AMAE, Leg. 2658. Respuesta del Gobierno de Turín (7 enero 1849) al Gobierno español. El texto también en F. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, *La revolución de Roma* cit., pp. 42-44.

²⁰⁾ *Ivi*, p. 56.

²¹⁾ *Ivi*, pp. 54 sgg.

²²⁾ AMAE, Leg. 2659. F. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, *La revolución de Roma* cit., pp. 80-82.

lugar de Italia. Los puntos fijados en las instrucciones eran los siguientes: que el objeto de las conferencias debía consistir únicamente en el restablecimiento de la autoridad del Papa; que no tocaba a la conferencia discutir sobre el régimen interior que hubiese de establecerse en los Estados pontificios, pues esto era privativo del Papa y debía dejársele en completa libertad; que la independencia del Papado exigía que cualquier intervención fuese precedida de una demanda de Su Santidad y del acuerdo de las potencias católicas; que ninguna potencia, ni tan siquiera las italianas, podía actuar sin mediar el consenso de los países católicos; que la aportación española podría fijarse en 8.000 hombres; que sería interesante determinar una indemnización para sufragar los gastos de las tropas intervinientes; que las potencias católicas deberían declarar la intangibilidad de los Estados Pontificios como garantía de la independencia del Papa; que el Gobierno español era partidario de una declaración de neutralidad perpetua de los Estados Pontificios; que el Papa tuviese representación en la conferencia; por último, que las potencias no católicas podrían enviar representantes, siempre que se adhiriesen a los principios que inspiraban su reunión.²³⁾

En la segunda mitad de febrero, las conversaciones entre el Embajador español y el Secretario de Estado vaticano permiten observar cómo se va perfilando la idea de una intervención armada restringida solo a las cuatro naciones católicas, solicitud que se plasma en la Carta del cardenal Pro-secretario de 18 de febrero.²⁴⁾ Dicho documento consistía en un memorial de agravios en el que se narraban todos los excesos cometidos por los demócratas y que, en sus párrafos finales, fijaba el objetivo de la ayuda solicitada: «restablecer el orden en los Estados de la Iglesia y restituir al Soberano Pontífice el libre ejercicio de su autoridad suprema».

Mientras tanto, Francia seguía presentando nuevas alternativas dilatorias que, en opinión de los diplomáticos españoles, tendían a abortar cualquier intento de intervención en Italia.

El 23 de febrero se enviaban nuevas instrucciones a Martínez de la Rosa con el fin de encarar la representación de España en la conferencia que debía reunirse en Gaeta.²⁵⁾ Los puntos esenciales de la misma eran: restablecimiento de la autoridad del Papa, excluyéndose cualquier otra propuesta política; no se debe tratar la cuestión del régimen político que

²³⁾ *Ivi*, pp. 61-62.

²⁴⁾ El texto de la carta en AMAE, Leg. 2659 y *ivi*, pp. 89-95; y los prolegómenos en pp. 85-89.

²⁵⁾ F. FERNÁNDEZ DE CORDOVA, *La revolución de Roma* cit., pp. 99-104.

debe adoptarse en los Estados Pontificios; las primeras iniciativas deben ser morales, pero no debe descartarse el uso de la fuerza; la intervención armada deberá ir precedida de una petición papal; las potencias designadas para llevar a cabo la intervención «deberán constituirse en ejecutoras de las resoluciones adoptadas por el Congreso».

Se sienta el principio general de que se trata de una intervención católica, lo que les permite sortear varios escollos: el nacionalista italiano, que aspira a considerarlo una cuestión interna, y el político, auspiciado por Francia, que deseaba llevar a cabo modificaciones en las instituciones. Además, se pretendía que se sentasen las bases de una estabilidad de los Estados Pontificios, garantizada por las naciones católicas. Para ello, utiliza una figura graciosa, como es la de calificarlos de *dote*.

El 2 de marzo se celebraba la primera sesión de la Conferencia. En ella se mostraron las primeras desavenencias entre los reunidos. Los españoles acusaban a los franceses de querer dilatar la cuestión y de carecer de una idea clara de lo que se pretendía. Por otra parte, los franceses insistieron en la necesidad de adoptar reformas en las instituciones de los Estados Pontificios.

Los acontecimientos políticos en la Península italiana también influían en el desarrollo de las conversaciones. La victoria austríaca y la renuncia de Carlos Alberto, fortalecían considerablemente las posiciones más moderadas. Resultaba evidente que las tropas austríacas estaban dispuestas a entrar inmediatamente en los Estados Pontificios, lo que movió a Francia a decidirse inmediatamente por la intervención con el objetivo de no perder su influencia en Italia.

En abril de 1849, las tropas francesas iniciaron las acciones contra la República Romana. Con el fin de contrarrestar dichas actuaciones, Nápoles y España se concertaron para iniciar la campaña por el sur. Por parte española intervendrían las fuerzas navales mandadas por el brigadier Bustillos.

La expedición española

A principios de mayo, Narváez encargó a Fernando Fernández de Córdova el mando de la expedición española que debía dirigirse a Italia, y le habló de «los grandes resultados morales que de la intervención de nuestras armas se esperaban». En las instrucciones que se le dieron se recordaban los aspectos fundamentales de la política española respecto a los Estados

Pontificios: restablecimiento del Papado sin inmiscuirse ulteriormente en su actividad.²⁶⁾

El 23 de mayo salieron del puerto de Barcelona los buques de transporte, y cuatro días más tarde llegaban a Gaeta. Durante el mes de julio llegarían nuevas fuerzas para completar los 8.000 hombres que debían integrar la expedición. El Rey de Nápoles ofreció al general español el mando de las fuerzas conjuntas hispano-napolitanas, pero se debería limitar a mantener una posición defensiva en la frontera. Poco tiempo después iniciaron la marcha, ocupando Terrachina el 4 de junio.

Ante los problemas que encontró el cuerpo expedicionario francés y la falta de enemigos del ejército español, Fernández de Córdova optó por ofrecer su colaboración a Oudinot en el sitio de Roma. A la negativa de éste se sumó la reprobación de Martínez de la Rosa y del general Narváez. Esa actuación hubiera ido en contra de las estipulaciones de Gaeta, que reservaban a Francia las operaciones sobre la capital, y al hecho de que situarse en dependencia de dicho ejército podía conducir a las fuerzas españolas a una situación tensa o a apoyar el incumplimiento de lo establecido en Gaeta.

Al producirse el enfrentamiento entre el Gobierno francés y el Papa sobre las cuestiones políticas de la restauración, España apoyó al Pontífice. A principios de septiembre los generales españoles visitaron al Papa en Nápoles. España, junto con Austria y Nápoles, presionaron a los franceses para que abandonaran Roma, a fin de evitar posibles conflictos con las autoridades impuestas por el Pontífice. Narváez aconsejaba de esta forma:

«Creo perjudicialísimo el estado de indecisión en que se encuentra su Gobierno [papal]: que sería muy conveniente que tomase un partido pronto, que haga las concesiones que crea compatibles con sus miras futuras, y que basten para que los franceses den por terminada su intervención y se retiren sus tropas de los Estados Pontificios, y entonces Su Sanidad, en libertad de obrar por sí y no teniendo con el Gobierno de Francia ninguna clase de compromisos, podrá ir poco a poco, insensiblemente, cercenando las concesiones que haya hecho».²⁷⁾

Pero Francia no tenía ninguna prisa en retirar sus soldados, mientras el Gobierno español se encontraba en situación contraria. El 11 de sep-

²⁶⁾ Sobre este tema, tienen todavía algún interés los trabajos de G. BERNI, *La spedizione spagnola nel 1849*, in *Capitolium*, XXIV (1949), n. 11-12, pp. 369-378, y L. SANDRI, *L'intervento militare spagnolo contro la Repubblica Romana nel 1849*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, XXXVII (1950), f. I-IV, pp. 459-464.

²⁷⁾ F. FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, *La revolución de Roma* cit., p. 364.

tiembre se comunicó la noticia de que se debería ir preparando la retirada. Las razones aducidas para ello eran el coste de las tropas; la conveniencia de reducir el Ejército; las necesidades militares que reclamaban las posesiones españolas y el deseo de mantenerse neutrales. Aun así, el primer embarque de las tropas españolas no se realizó hasta el 22 de diciembre y el último, que transportaba al general Fernández de Córdova, se llevó a cabo a principios de marzo de 1850.

El Parlamento y la República de Roma

Entre finales de 1848 y los últimos meses de 1849, la cuestión de Italia pasó a formar parte importante de los debates parlamentarios de los Diputados españoles. Nunca basta entonces había ocurrido, y no sería exagerado afirmar que a partir de aquellos acontecimientos los sucesos de Italia pasaron a formar parte del discurso de la política general española. Los debates por lo sucedido en Roma entre 1848 y 1849 contribuyeron a formar la identidad de las fuerzas políticas españolas: moderados, progresistas y demócratas. Para los primeros, la cuestión de Italia sería en realidad desde entonces la cuestión de Roma, mientras que para los segundos los acontecimientos que se vivían en la península italiana eran el ejemplo de los nuevos tiempos, la lucha de las fuerzas populares contra los gobiernos despóticos, "la causa más noble, más bella y más justa". Dos posiciones que se ven inalteradas hasta 1870 y que, aunque con fuerza ya bien distinta, continuará sin embargo formando parte ocasional del discurso político.

La defensa por parte de progresistas y demócratas de las dos potestades, la salvaguardia del poder espiritual frente a la contingencia del poder temporal que debía someterse en consecuencia a las transformaciones de los nuevos tiempos; el respeto que debía seguir el Gobierno de España hacia este principio; la inoportunidad, por tanto, de apoyar militarmente al Papa a costa de las aspiraciones del pueblo de Roma, compondrán los ejes principales de sus argumentaciones en el Congreso de los Diputados. Por su parte, los moderados, instalados en el Gobierno, se encerrarán en la inevitabilidad de la intervención de España como mejor salvaguardia de los intereses del catolicismo, como «un asunto de familia» como expresaría Narváez; como la mejor defensa de un Papa conciliador y magnánimo que ha sido insultado por las fuerzas «demagógicas»; como la única manera de entender la, para ellos, evidente relación entre el poder temporal y el poder espiritual; en fin, como la mejor manera de combatir la revolución que se

presenta siempre destructora, ajena a las progresivas y lentas reformas y desconocedora de los legítimos derechos del gobernante y, en este caso, de su bondad para con el pueblo.

En tres momentos distintos fueron discutidos los sucesos de Roma y la postura adoptada por España: en diciembre-enero de 1848-1849; en mayo y, por último, en noviembre de 1849. No pretendemos reproducir las innumerables intervenciones que tuvieron lugar, pero si creemos necesario, por lo que queda dicho, resaltar aquellos momentos en los que desde las distintas posiciones políticas se expone una forma de concebir el problema que trasciende tanto a los acontecimientos sobre los que se discute, como el propio marco temporal.

El 15 de diciembre de 1848, se abría un nuevo período de sesiones en el Parlamento español, tras el cierre de varios meses durante los episodios revolucionarios que habían agitado España, pero sobre todo Europa. En dicha ocasión la Reina pronunció ante los Diputados el Discurso de la Corona en el que aludía directamente a los sucesos de Roma. El segundo párrafo estaba dedicado a la posición española ante dicho problema:

«Como era de esperar de su paternal solicitud, la Santa Sede ha restablecido completamente sus antiguas relaciones con la católica España; pero al anunciaros tan fausto suceso, no puedo menos de recordar otro funesto y doloroso. El Sumo Pontífice se ha visto obligado a abandonar la capital del orbe católico y a buscar un refugio en tierra extraña. En tan dolorosas circunstancias, no he vacilado un momento en ofrecerle el apoyo de la España, y un seguro y cordial asilo en esta Nación siempre católica y piadosa».²⁸⁾

En el proyecto de contestación, aun sin abordar nuevas cuestiones, la alusión era más extensa y evidenciaba además una redacción inspirada por el sector moderado, especialmente en la afirmación de que los sucesos de Roma habían arrancado una «expresión unánime de sorpresa y dolor del corazón de todos los fieles y del mundo ilustrado y culto».²⁹⁾

Tal enfoque no podía ser pasado sin discusión por parte del sector progresista de las Cortes, quien propuso una enmienda firmada por algunos de las principales cabezas del partido: Ordax y AVECILLA, Alonso Cordero, Rivero, Puig, Sagasti, Sánchez Silva y Aguilar.³⁰⁾ En ella se felicitaban por el

²⁸⁾ DSC, 15 diciembre 1848, n. 1, p. 2.

²⁹⁾ *Ivi*, 27 diciembre 1848, n. 7, apéndice segundo, p. 45.

³⁰⁾ *Ivi*, 29 diciembre 1848, n. 9, p. 52.

restablecimiento de las relaciones con la Santa Sede, lamentaban «que el Sumo Pontífice haya abandonado los dominios temporales de la Iglesia», y manifestaban su deseo porque «terminasen de un modo pacífico las desavenencias de Pío IX con sus súbditos, sin género alguno de intervención ofensiva a la dignidad e independencia del pueblo romano». La redacción conllevaba una carga ideológica importante. Se eliminaba la mención a que el Papa se había visto obligado a huir, y se cambiaba «capital del orbe católico» por «los dominios temporales de la Iglesia», expresión teñida de regalismo. Por otra parte se intentaba vetar una intervención española en dichos territorios, rumor que ya circulaba en los medios políticos.

La defensa del texto corrió a cargo de Ordax, quien se centró en dos conceptos del discurso de la Corona: asilo y apoyo, que consideraba inapropiados. El primero por innecesario, pues el Papa podía establecerse en cualquier iglesia del mundo, además asilo se consideraba un término que implicaba una gracia por lo que no era aplicable a quien gozaba de un derecho propio. Respecto al segundo concepto, apoyo, se defendió la teoría de las dos potestades: la potestad espiritual no necesita apoyo pues no es atacada por nadie y si, en cambio, se apoya la potestad civil (Rey de Roma), ello implicaría el uso de «medios eficaces para destruir las determinaciones de un pueblo» y, en consecuencia, atacar la independencia de otras naciones.³¹⁾

Cómo era de esperar, la enmienda fue rechazada por 130 votos contra 19. La argumentación en nombre de la Comisión la realizó Puche y Bautista, señalando que no se podía insinuar mala fe o violencia en el Pontífice, debido a que había realizado numerosas concesiones políticas, que habían sido respondidas con el asesinato de uno de sus ministros y tener que huir de Roma. España no podía ponerse del lado de los que habían provocado «este acto intolerable».³²⁾

Pocos días más tarde volvía a debatirse la cuestión. En esta ocasión tomó la palabra uno de los mejores oradores de la Cámara: Manuel Cortina (Ministro en 1840), quien no había participado en la votación de la enmienda anterior. Si bien dentro de las filas del progresismo su postura presentaba ciertas matizaciones.³³⁾ En primer lugar, es necesario señalar que Cortina quedó profundamente afectado por los sucesos revolucionarios de 1848,

³¹⁾ *Ibí*, pp. 56 sgg.

³²⁾ *Ibí*, p. 64.

³³⁾ *Ibí*, 3 enero 1849, n. 12, p. 121.

hecho que provocó su evolución hacia posiciones más moderadas y, sin duda alguna, uno de los elementos que más le impactó fue el asesinato de su amigo Rossi en Roma. Lamentaba «que el Sumo Pontífice se haya creído obligado a abandonar la capital del Orbe católico» porque, en su opinión, la monarquía romana y su completa independencia eran una necesidad para Europa. Pero, al mismo tiempo, mostró su completa oposición a una intervención extranjera, que comparó con la francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis, e indicaba que si no se había intervenido en Francia tampoco había razón para hacerlo en Roma.

La respuesta del Ministro de Estado, Marqués de Pidal, atacó el principio de la división entre poder temporal y espiritual, porque «las dos potestades aquí están unidas», y en su opinión de esta forma se garantizaba mejor la independencia de su autoridad espiritual.³⁴⁾ Resultaba evidente la posición del Gobierno, que anunciaba estar realizando gestiones para organizar una fuerza común:

«Así, pues, el Gobierno no tiene reparo alguno en decirlo, que ha ofrecido su apoyo al Padre común de los fieles para restituirle a aquel estado de independencia sin el cual no puede ejercer debida y dignamente sus funciones; por esto el Gobierno de S.M se ha dirigido a todas las demás Naciones diciendo que este no era interés español ni francés de ninguna parte, sino el interés del catolicismo, y que todos tenían un interés igual en que el Padre común de los fieles sea restituido a aquella situación de independencia y decoro, sin la cual no puede ejercer sus funciones».

A mediados de mayo, las Cortes volvían a asistir a un debate sobre la cuestión de Roma con la intervención militar de España como trasfondo. Los elementos más radicales de la Cámara (José Ordax, A. Puig, Nicolás M. Rivero, Félix Martín, Aguilar, Juan P. Puchada y Gabino Gascó) presentaron una proposición para reprobar el envío de tropas a Roma.³⁵⁾ La defensa de la propuesta corrió a cargo de Ordax y Avecilla, quien al iniciarla señaló «nunca me he levantado a hablar en el Congreso con la misma convicción ni con igual decisión». La argumentación se basaba en las razones siguientes: en primer lugar, los acontecimientos de Roma aparecían como el resultado de los «principios sobre los cuales se asientan todos los Gobiernos de justicia», la República Romana podría presentarse pues como la causa «de

³⁴⁾ *Ivi*, p. 136.

³⁵⁾ *Ivi*, 19 mayo 1849, n. 99, p. 2299.

la civilización, la del progreso de las sociedades políticas»; en segundo lugar y en lógica con lo anterior, el Gobierno español no tenía ningún derecho a intervenir; en tercer lugar, se defendía la separación de poderes, temporal y espiritual, y la imposibilidad de que uno se basase en el otro por tener distinto ámbito y tiempo de ejercicio («la autoridad temporal tuvo origen en el tiempo, principió en la historia, no puede confundirse con la autoridad espiritual, que no tiene principio, no tiene tiempo, no tiene fecha en la historia»), con lo cual se concluía que la argumentada restitución del Pontífice consistía en realidad en la reposición de un Rey; en cuarto lugar, se conceptuaba de ridícula y teatral la intervención de España frente al poder militar que estaban dispuestos a utilizar Francia, Austria e incluso Nápoles; en quinto lugar, se subrayaba la inexistencia de una política italiana por parte de España frente a los manifiestos intereses de las otras potencias, en caso de disputa entre ellas, se preguntaba el orador, ¿qué papel desempeñará España?; en sexto y último lugar, un argumento que incumbía el papel desempeñado por las Cortes en la tramitación del asunto: ¿quién había autorizado al Gobierno a realizar el gasto que iba a suponer la expedición militar?

El ministro de Estado, Pedro José Pidal, inició su contestación anunciando oficialmente el envío de tropas a Italia, «hoy puede decir el Gobierno que se han dado órdenes para que la expedición se embarque para las costas de Italia».³⁶ Anuncio que, sin embargo, llegaba con mucho retraso pues ya entonces hacía días que la prensa había aireado la noticia poniendo en evidencia los preparativos que se estaban realizando.³⁷

Entrando en las tesis de Ordax respondió que, de acuerdo con la Constitución, el Rey podía declarar la guerra y dar cuenta con posterioridad al Parlamento y, por otra parte, había quedado claro desde el principio que el Gobierno pensaba prestar apoyo al Papa, tal como se había anunciado en el Discurso de la Corona y había sido aprobado por el Parlamento. El Gobierno no creía necesario de momento aprobar un presupuesto extraordinario. Tras estos prolegómenos, abordó la cuestión política de la personalidad de Pío IX a quien consideraba el impulsor de las ideas liberales en Italia, «la libertad hermanada con el orden», enumerando las bondades del Pontífice frente al pésimo comportamiento de «ese partido antisocial y demagogo». Además, señalaba que incluso el Gobierno republicano de Francia, nacido de las barricadas, se había aprestado a enviar tropas en su

³⁶ *Ivi*, p. 2304.

³⁷ *El Clamor Público*, 9 mayo 1849 (1/2, 3); *La España*, 10 mayo 1849 (3/3, 4).

apoyo, postura a la que se unió inmediatamente el español. ¿Cuáles eran las razones de la intervención?

« [El Gobierno español] vio que gobernando a una Nación católica no podía prescindir de mirar por el interés del catolicismo en un asunto esencialmente católico que podía comprometer las tranquilidad, y producir la alarma de las conciencias, y comprometer otra porción de intereses que se han visto siempre comprometidos cuando cuestiones de esta clase se han resuelto de una manera inconveniente ».

A continuación, se exployó en informar sobre la nota enviada el 21 de diciembre y las respuestas recibidas de cada una de las naciones a las que se dirigieron. El extenso discurso de Pidal pasó por analizar cuestiones jurídicas, históricas y religiosas que justificaban la posibilidad y la necesidad de la intervención española. Respondió a diversas insinuaciones sobre el papel de España en dicha empresa, papel que Ordax consideraba en términos denigrantes:

« Nosotros no tratamos de intervenir en el arreglo interior del gobierno de los Estados Pontificios; vamos solo a un interés católico, español, a que el Papa tenga una situación de dignidad, de decoro, de libertad, para que pueda ejercer sus sagradas funciones, porque de otra manera no sería respetado ».

Pidal pensaba que España era la que iba a desempeñar un papel más altruista en la empresa porque, precisamente, no tenían los intereses en Italia que exhibían por el contrario Francia, Austria y Nápoles, ya fuera para mantener su influencia ya para asegurar la tranquilidad de los territorios en los que tenían intereses. El discurso terminó con una nota que denigraba a señeras figuras de la República, en el intento de poner de manifiesto que no eran romanos y que, en consecuencia, estos se habían dejado arrastrar por « extranjeros ».

« Yo pregunto ¿quién está al frente del poder en Roma? ¿quién es Mazzini? ¿de dónde es? ¿es de ese Estado? ¿quién es Avezzana, el Ministro de la Guerra? Un genovés. ¿Quién es Garibaldi, el que manda las tropas? Creo que es toscano o lombardo. En fin, es cosa sabida que desde el jefe hasta el último soldado con cortísimas excepciones son una colubie de extranjeros que se ha apoderado de Roma y ha presentado resistencia al general Oudinot ».³⁸⁾

³⁸⁾ DSC, 19 mayo 1849, n. 99, p. 2309.

La cuestión volvió al Parlamento una vez finalizada la actuación de las tropas españolas en Italia. Al iniciarse un nuevo período de sesiones, en el que no había discurso de la Corona, uno de los políticos más notables del liberalismo español, Salustiano Olózaga, solicitó en nombre del partido progresista que el Gobierno diese explicaciones sobre «el estado del país y sus relaciones con las Potencias extranjeras».³⁹⁾

A lo largo del discurso trató con especial interés la expedición a Roma. Recordó las interpelaciones anteriores y centró la crítica en la falta de información sobre el coste de la expedición («dicen que no ha costado nada, por eso algunos la llaman *expedición franciscana*») y en la reiteración del reproche sobre la carencia de un proyecto, porque nunca se habló de objetivos y se desconocía además cuándo se iba a producir la repatriación de las tropas.

La respuesta del Presidente del Consejo de Ministros, Ramón M^a Narváez, fue iniciada citando el tratamiento dado en la Constitución de Cádiz a la Religión Católica. Sobre ello basó su argumentación para concluir que España estaba obligada a salir en defensa del Papa, al que se consideraba prisionero en su propia casa:

«Cuál ha sido el objeto de la expedición, un objeto puramente religioso, un objeto puramente de conciencia. Como Nación católica, hemos querido que el Santo Padre se libertara de las hordas de asesinos y sicarios que le tenían oprimido, para que ejerciera libremente sus funciones y pudiéramos estar seguros de que nuestra conciencia lo estaba también y que la religión de los españoles no tenía impedimento para ejercerse con toda la confianza que la conciencia exige».⁴⁰⁾

Al día siguiente el diputado Benavides volvía a incidir ampliamente en la misma cuestión. Tachaba la política realizada en este caso de sentimental porque, afirmó, las demás naciones habían ido a conseguir beneficios materiales, mientras España no actuaba con las mismas intenciones. En una visión irónica comparaba la expedición con las cruzadas y destacaba los posibles peligros que para el Ejército español podían haberse derivado del contacto con demócratas y republicanos, tanto italianos como los encuadrados en las filas de otras naciones. Finalmente, declaraba que la índole de la

³⁹⁾ *Ivi*, 4 noviembre 1849, n. 4, p. 17. La petición llevaba las firmas de Salustiano Olózaga, José de Gálvez Cañero, Luis Sagasti, Pedro Gómez de la Serna, Sánchez Silva, Patricio de la Escosura y Evaristo San Miguel.

⁴⁰⁾ *Ivi*, 5 noviembre 1849, n. 5, p. 35.

cuestión romana garantizaba que la solución adoptada no fuera definitiva, que volvería a surgir de nuevo porque las aspiraciones populares habían quedado insatisfechas:

«La cuestión romana o de Italia parece que termina en estos momentos, que ha llegado a su solución; solución interina, porque la cuestión de Italia no puede tener solución próxima, porque no puede tener solución próxima toda cuestión con un pueblo que pelea por su independencia, por su libertad, por todas las cosas más sagradas que puede tener un pueblo, y por eso la cuestión podrá aplazarse; así como se aplazó en 1831, se aplazará también en 1850; pero la cuestión no está resuelta». ⁴¹⁾

El debate continuó durante varios días en los que intervinieron figuras de tanto peso político como el general Evaristo Fernández San Miguel. Siempre insistiendo en la cuestión de la concepción del poder temporal de los papas, la falta de justificaciones para restablecerla y la mejor situación en su ejercicio cuando el Papa ha estado desprovisto del poder civil: «la cuestión de Roma es política, mundana, no religiosa [...] No hay en Roma un hombre creyente e ilustrado que quiera el gobierno pontificio; todo el mundo reconoce que es un gobierno reprobado por la razón, por las circunstancias, por los acontecimientos de la época, y que no puede durar así». ⁴²⁾ Lo que más les dolía a los progresistas, era que el Papa había jugado sus cartas para restablecerse como monarca absoluto, sin permitir modificaciones políticas que satisficieran a sus súbditos. Es un crimen lo que ha cometido Europa, manifestó Escosura, «yendo a ahogar bajo sus plantas la nacionalidad romana [...] Yo no veo en Roma más que un pueblo cansado del yugo clerical; un pueblo que no quiere ese yugo, y a quien cuatro Naciones van a imponérsele a la fuerza con los cañones y las bayonetas [...] Me se enciende la sangre en las venas al contemplarlo». ⁴³⁾

A lo largo de varias sesiones el Parlamento asistió al enfrentamiento de moderados y progresistas, que se saldó con la derrota de los segundos. Pero quizás lo más importante de este resultado, una vez visto el análisis de los progresistas (todo un programa ideológico), sea destacar el discurso que hizo el conde de San Luis, ministro de la Gobernación, porque supone la

⁴¹⁾ *Ivi*, 6 noviembre 1849, n. 6, p. 53.

⁴²⁾ *Ivi*, pp. 79-81.

⁴³⁾ *Ivi*, p. 98.

réplica a los progresistas y también un avance de lo que será su actuación en adelante con respecto a Italia:

«¿Y qué representa Mazzini, Señores? ¿Representa acaso alguna idea de libertad, de progreso? [...] No, Señores; que de él ha dicho uno de los jefes del partido liberal más avanzado de Italia, el abate Gioberti, que el enemigo más terrible de la libertad de Italia era José Mazzini [...] Porque siempre que la Italia entre en las vías de progreso, y de progreso lento como no puede menos de ser, siempre que la Italia pida libertad y no aspire a realizar quimeras y utopías irreales, siempre, señores, tendrán las simpatías de los liberales y las simpatías de los gobiernos constitucionales de Europa». ⁴⁴⁾

El significado de la cuestión de Roma. Apuntes historiográficos

Para los progresistas y demócratas españoles del momento, Italia se convertía, como escribió un autor al inicio de los años cincuenta, en el escenario «donde ha de dirimirse la gran contienda que se agita hace cerca de un siglo en Europa entre el despotismo y la libertad». ⁴⁵⁾ Italia pasa al primer plano en España, en su literatura histórica que pone de manifiesto en sus diferentes enfoques sobre la cuestión, las distintas posiciones políticas del momento entre moderados por un lado y progresistas y demócratas por otro.

Según la postura de los moderados, el derecho de los italianos a su independencia de potencias exteriores, a su libertad bajo parámetros constitucionales y a su unidad como Estado, no debía conculcar los legítimos y sagrados derechos de la Santa Sede como poder temporal que, al entender de la mayoría de ellos, garantizaba no solamente la independencia histórica de la Iglesia católica, sino que también daba sentido original y fuerza a Italia y al mundo latino en general. Esta era la tesis que sostenía en líneas generales Nicolás Pastor Díaz, que coincidía, en tono quizás algo más mesurado, con la del político y diplomático Joaquín Francisco Pacheco y que de forma también protagonista se plasma en el libro, justificativo y exculpatorio desde tantos puntos de vista, del general Fernando Fernandez de Cordova. ⁴⁶⁾

⁴⁴⁾ *Ivi*, 8 noviembre 1849, n. 8, pp. 103-104.

⁴⁵⁾ M. PÉREZ LUZARÓ, *Historia de la Revolución de Italia en 1848 y 1849*, Madrid, 1851, p. 648.

⁴⁶⁾ N. PASTOR DIAZ, *Italia y Roma. Roma sin el Papa*, Madrid, 1866; J.F. PACHECO, *Italia. Ensayo descriptivo, artístico y político*, Madrid, 1857.

Nada que ver con la literatura progresista de aquellos momentos. El libro de Mariano Pérez Luzaró, publicado en 1851, es quizás uno de los mejores ejemplos. Las revoluciones de Italia debían ser situadas según este autor dentro de un concepto de la historia protagonizada por los pueblos que exigen la marcha hacia el progreso:

«porque nadie hay ya que ignore de buena fe que la ley del mundo es la ley del progreso, y que si los reyes y las demás clases privilegiadas han resistido y resisten al desarrollo teórico-práctico de los principios en que se reconoce y proclama la libertad, es porque con los derechos y con el interés de los pueblos son incompatibles los derechos y los intereses de los gobiernos arbitrarios». ⁴⁷⁾

Considera también «ilegítima» la intervención militar de Francia y España y, a pesar de que comienza su obra con grandes loas a los esfuerzos reformistas de Pío IX, al que denomina «antorcha luminosa» frente al oscurantismo de Gregorio XVI, se manifiesta totalmente en contra del poder temporal de los papas. En fin, considera humillante la intervención militar española, que puso ante los ojos de Europa el papel de comparsa que España jugaba ya en los asuntos continentales. Para Luzaró, quien escribiera que Italia era el teatro de la gran contienda secular entre el despotismo y la libertad, fue esa Europa reaccionaria quien pisoleó los justos anhelos del pueblo italiano, cuya causa «es la más santa, la más justa y la más hermosa». ⁴⁸⁾ Finaliza el autor su libro achacando la derrota también a los graves errores cometidos por los patriotas italianos, ya que debían haber concentrado en primer lugar todos los esfuerzos en la lucha contra los austriacos. Por este orden, primero la independencia, después la revolución y la libertad.

En línea directa con el pensamiento conservador decimonónico debemos inscribir el trabajo de Luis García Rives sobre *La República romana de 1849*, escrito en 1932. ⁴⁹⁾ Comienza considerando que los historiadores que se han ocupado del tema lo han hecho «con pasión harto manifiesta» seguramente, afirma, por desconocimiento absoluto de la cuestión. Acusa a Luzaró de «ultraliberal y demagógico» por ensalzar a los revolucionarios y denigrar «la supuesta tiranía de los elementos que ha dado en llamar reac-

⁴⁷⁾ M. PÉREZ LUZARÓ, *op. cit.*, pp. 108-109.

⁴⁸⁾ *Ivi*, p. 653.

⁴⁹⁾ L. GARCÍA RIVES, *La República romana de 1849*, Madrid, 1932.

cionarios». García Rives, archivero entonces en el Ministerio de Estado, reitera que su trabajo se realiza lo más objetivamente posible porque cuenta con fuentes de primera mano. Por supuesto, el Papa aparece siempre como la víctima de una situación que le sobrepasa y que a pesar de su bondad y caridad cristiana se ve incapaz de acometer. Su objetividad además se desvanece cuando enjuicia algunos sucesos y cae en el apasionamiento del que acusaba a otros autores. Como ejemplo, describe a Mazzini como «un genovés fanático, dotado de talento pero de una audacia sin igual [...] “La Joven Italia” siguiendo las inspiraciones de Mazzini, que era un fanático frío y cruel, cometió todo género de excesos».⁵⁰⁾ Crítica la intervención militar española por no haber sido más resuelta, más rápida, más contundente y dejar que fuesen los franceses quienes hicieran el «trabajo». Por último, considera un grave error del Gobierno español el haber repatriado las fuerzas y permitir que el Papa se apoyase en el ejército francés.

A modo de conclusión

Aunque respecto al Papado España no logró hacer valer el apoyo otorgado a la hora de la negociación del Concordato, prolongándose durante más de un año, puede decirse, sin embargo, que España logró legitimarse políticamente ante ciertas naciones europeas, con independencia de que no llegaran a acceder al reconocimiento de Isabel II. Pero a pesar de tantos esfuerzos, es cierto que la forma en que se produjo la intervención armada y diplomática española, señalaban a España como una potencia de segundo orden. Contrastaba la firmeza utilizada por los diplomáticos españoles en las Conferencias de Gaeta, los primeros en asegurar la necesidad de una intervención armada en defensa del Papa, frente al papel dubitativo, otorgado tardíamente y subalterno al fin y al cabo que desarrolló la fuerza expedicionaria enviada por Narváez a Italia.

Pero la intervención de España en Italia tenía también un importante motor en las cuestiones internas de la península y que no serían otras, a juicio de Mugnaini que recoge la tesis de Spellanzon y Di Nolfo, que por «la necessità di battere i carlisti sul terreno della devozione alla Chiesa».⁵¹⁾

⁵⁰⁾ *Ivi*, p. 79.

⁵¹⁾ M. MUGNAINI, *All'origine dell'ispanismo storiografico contemporaneo in Italia*. 2. *Dal decennio cavouriano alla prima guerra mondiale*, in *Spagna Contemporanea*, 2 (1993), p. 9; cfr.

El que fuera en aquellos momentos revolucionarios embajador de España en Nápoles, el duque de Rivas, declararía en 1850 en el Senado que «intervenir en los asuntos de la Iglesia Católica Romana, ¿no era intervenir en nuestros más caros intereses, en nuestro propio país?». ⁵²⁾

La defensa del poder temporal de los papas por parte de los conservadores quitaba argumentos a las fuerzas ultramontanas que tenían en ese aspecto, convertido después en la máxima «viva el Papa-Rey», una de sus señas de identidad más caracterizadas. Pero había también en la postura de moderados o conservadores frente a los sucesos de Italia, ya se ha apuntado anteriormente, un motor antirrevolucionario e incluso, como defendería Cánovas del Castillo, toda una concepción de la Historia.

FERNANDO GARCÍA SANZ
JOSÉ RAMÓN URQUIJO GOITIA

C. SPELLANZON y E. DI NOLFO, *Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, Milano, 1933-1965 (8 vols.), vol. VII, 1960, p. 270.

⁵²⁾ Diario de Sesiones del Senado, del 13 de noviembre de 1850. Citado por M. AZAÑA en *Valera en Italia. Amores, política y literatura*, Madrid, 1929, p. 111.